

LA PRIVATIZACIÓN DE LA PETROQUÍMICA: HACIA LA CANCELACIÓN
DEL PROYECTO NACIONAL DE DESARROLLO

La venta de la petroquímica: decisiones autocráticas, costos políticos

John Saxe-Fernández*

De manera autocrática e inconstitucional Ernesto Zedillo, actual ocupante de la Oficina de la Presidencia mexicana decidió proceder con el proyecto estadounidense encaminado al desmantelamiento y privatización de los complejos económico-territoriales de mayor envergadura de México como son los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, electricidad y la principal empresa del país, Petróleos Mexicanos (Pemex), empezando con "Pemex-Petroquímica" y "gas natural". A principios de febrero y ante la comunidad bancaria italiana Zedillo sintetizó el tema de fondo de su viaje por Europa con estas palabras:

...México se encuentra inmerso en un proceso de privatización de los ferrocarriles; trabaja arduamente en el nuevo marco regulatorio para lograr la inversión privada en la distribución, comercialización y almacenamiento de gas natural, así como en la privatización de las plantas

* Investigador y Coordinador del Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

petroquímicas secundarias de Pemex y de las terminales portuarias y aeroportuarias que presentan características para tal efecto.

Cabría aclarar que no es “México”, sino el gobierno de Zedillo el que despliega arduos esfuerzos para proceder con la subasta de empresas en cuya operación cotidiana está involucrado el territorio nacional como un todo y sus principales recursos y actividades estratégicos. Lo que Zedillo no les ha advertido a los inversionistas es que el neoliberalismo ha transformado a México en un polvorín socioeconómico y que no existen ni bases constitucionales ni consensos políticos para la virtual entrega de la nación como botín a los acreedores. Por ejemplo, lo que el sucesor y continuador de Salinas denominó “petroquímica secundaria” es producto de arbitrarias reclasificaciones de petroquímicos básicos en secundarios, según recomendaciones del Banco Mundial a los antecesores de Zedillo. Por lo tanto, las “desincorporaciones” mencionadas por Zedillo están al margen de la normatividad vigente pues la Constitución ordena en sus artículos 25, 27 y 28, que la petroquímica básica es un área estratégica cuya explotación corresponde de manera exclusiva a la nación, sin que en ella puedan participar empresas privadas mexicanas o extranjeras.

Las “ofertas” de Zedillo a la comunidad financiera internacional hechas desde Roma a principios de 1996 coincidieron con masivas movilizaciones populares que tomaron algunos de los principales pozos petroleros de Tabasco, como manifestación de disgusto ante la inequitativa participación que ese estado recibe de las ganancias petroleras. Pero más significativo aún es que a finales de octubre de 1995 decenas de miles de trabajadores petroleros realizaron manifestaciones en Coatzacoalcos, Veracruz y en otros lugares como Poza Rica y Minatitlán, donde está el complejo petroquímico de Cosoleacaque, para protestar contra el programa de privatización de la petroquímica. En esas entidades se organizaron varios plebiscitos con resultados tan significativos e importantes que fueron totalmente ignorados por los medios de comunicación electrónica y periodísticos.¹

¹ Aunque es importante reconocer que el periódico *The News* otorgó un lugar prominente en sus páginas financieras a un reportaje de David Shields, del cual derivamos los datos que estamos citando. Shields, David, “Public

Su impacto político difícilmente puede ser soslayado ya que, según datos recabados por David Shields, en Poza Rica un total de 48 291 mexicanos se manifestaron en contra de la privatización y sólo 716 a favor. La tendencia se repitió en Minatitlán —42 132 en contra de la privatización y 205 a favor— mientras las manifestaciones se repitieron en Guanajuato y Chihuahua. Estas muestras de rechazo al proyecto desnacionalizador indican que vastos sectores de la población afectada directa o indirectamente no aceptarán pasivamente las autocráticas decisiones presidenciales, incluso si contaran, como probablemente será el caso a fin de cuentas, con el apoyo legislativo de la mayoría mecánica del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Vale la pena tomar en cuenta que esas expresiones de rechazo popular ocurrieron antes de que se diera a conocer que Zedillo pactó ilegalmente la venta de los complejos petroquímicos a cambio del “apoyo” de Estados Unidos durante la última crisis financiera: “...la desincorporación de 61 plantas y complejos petroquímicos”, publicó la prensa el 19 de enero de 1996,

forma parte de los acuerdos asumidos por el gobierno mexicano para obtener el rescate financiero que a principios de 1995 le permitió sortear una suspensión de pagos de sus obligaciones contraídas con el exterior.²

Las privatizaciones anunciadas por Zedillo, como lo recordará quien revise *Problemas del Desarrollo*,³ son parte central de un proyecto hegemónico de América del Norte —y del Hemisferio Occidental— que en el caso mexicano, según información de la sede diplomática de Estados Unidos, incluye la apertura de 100% a la propiedad extranjera en

petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, energía nuclear, materiales radiactivos, comunicaciones vía satélite, ser-

outrage over petrochemical sell-off”, *The News*, 29 de octubre de 1995, p. 40.

² “La venta de petroquímicas, a cambio del apoyo de EU”, *La Jornada*, 19 de enero de 1996, p. 49.

³ Consúltase Saxe-Fernández, John. “México: ¿globalización o inserción colonial?”, Vol. XXV, núm. 96, enero-marzo de 1994, pp. 27-35.

vicios telegráfico y radiotelegráfico, correos, ferrocarriles, la impresión de dinero, el control inspección y vigilancia de puertos y aeropuertos.⁴

Este magno traspaso de patrimonio y operaciones a entes extranjeros articulado por medio de gobiernos como el de Salinas de Gortari y Zedillo, que operan al margen de la legalidad constitucional, constituye un importante basamento para la “geoeconomía” de grandes emporios continentales estadounidenses a los que estorba la federación mexicana y el concepto de “dominio directo de la Nación” sobre el suelo y subsuelo, consagrado en el artículo 27 constitucional y sobre el que no se puede establecer “marco regulatorio” alguno que le contradiga, aunque según palabras del propio Zedillo, la Oficina de la Presidencia realiza ingentes esfuerzos en ese sentido.

La privatización petroquímica, sin base normativa o de consensos políticos, carece además de razones financieras o técnicas ya que en 1995 Pemex no sólo operó con números negros siendo la principal fuente de ingresos del gobierno, sino que su sector petroquímico obtuvo utilidades por 2 577 millones de pesos. Pemex-Petroquímica (y gas natural) es pieza codiciada por el empresariado petrolero internacional porque una vez privatizada se habrá asestado un golpe mortal a la empresa como un todo ya que su éxito y sobrevivencia en el mercado global están íntimamente vinculados con su capacidad de integrar verticalmente sus actividades (exploración, perforación, almacenamiento, refinación, distribución, comercialización, etc.) como lo hacen las grandes empresas petroleras del mundo con las que ahora compite con enorme éxito dadas sus ventajas comparativas. Como lo sintetizó recientemente Benito Bucay, “...los grandes jugadores están integrados verticalmente. Shell va desde el pozo hasta el producto terminado; otros parten de la petroquímica básica y de ahí se van hasta seis etapas en la cadena”.⁵ La observación no es nueva aunque de extrema

4 Documento confidencial citado en Saxe-Fernández, John. “Los insurrectos: simpatías por sus demandas”, en *Excélsior*, 25 de enero de 1994, pp. 7A y 8A.

5 “La privatización en el peor momento: Bucay”, en *El Financiero*, 6 de febrero de 1996, p. 10. Saxe-Fernández, John, “México: ¿nación o botín?”, en *Excélsior*, 6 de febrero de 1996, pp. 7A y 16A.

importancia si se recuerda que aplicando lineamientos contrarios a los seguidos por “los grandes jugadores”, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Energía y la Dirección General de Pemex, todos bajo el influjo de asesorías estadounidenses como McKinsey and Company, procedieron a realizar desde hace varios años una “re-estructuración” administrativa de Pemex como parte del proyecto desnacionalizador que además incluye el permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero, en vez de contratos fijos; permitir la inversión extranjera mayoritaria en petroquímica; permitir la competencia nacional y extranjera con Pemex y finalmente llevar la empresa en su totalidad a un punto de venta. Desde el Seminario de Teoría del Desarrollo Michael Tanzer advertía desde principios de 1994 tres grandes falacias en los argumentos planteados por las consultoras estadounidenses y repetidos al público desde las más “altas” tribunas del poder público y de la paraestatal:

en primer lugar,... el gobierno mexicano se apropia del 95% de las ganancias de Pemex, bajo la forma de impuestos, de forma que no es sorprendente que Pemex tenga poco capital para invertir en exploración o petroquímica. Más aún,... los inversionistas extranjeros, bajo contratos de riesgo, buscarían altas tasas de ganancia sobre su inversión, así que, por ejemplo, si un inversionista espera una ganancia de 20% por cada dólar invertido (que para ellos es la ganancia mínima), tendrían que sacar 95 o 100 dólares por cada dólar a lo largo de un periodo de 20 años. De manera que permitir los contratos de riesgo significa pagar un precio muy alto por obtener capital extranjero privado. El segundo tipo de falacia consiste en que, en tanto se plantea la fragmentación de Pemex en varias compañías, el hecho es que las empresas petroleras privadas se dirigen en la dirección contraria, es decir, que están buscando una integración vertical completa de sus operaciones, para poderse coordinar lo más posible en cuanto a la producción, refinación y comercialización... si consideramos el argumento de permitir el ingreso de empresas petroquímicas extranjeras veremos que éstas no quieren depender de Pemex para la provisión de sus químicos básicos, sino que desean controlar todas las fases (como todos lo desean) para operar de manera integrada. De manera que lo que yace oculto detrás del argumento que promueve la fragmentación de Pemex es el objetivo de debilitar a la empresa petrolera estatal, porque el partirla en compañías separadas y permitir la entrada de grandes empresas extranjeras en la competencia significaría que Pemex carecería de recursos para hacer frente esas empresas y probablemente sucumbiría, sería sacada del mer-

cado nacional e internacional o se transformaría en una empresa muy pequeña.⁶

Muy a pesar de una cúpula administrativa que ya procedió con el “desmembramiento administrativo de Pemex”, el esfuerzo de técnicos, obreros y rangos medios administrativos permitió que en 1995 la paraestatal, como quiera que se le mida, diera muestras de ser un sonado éxito. Según información oficial su petroquímica es la novena de 11 empresas del ramo seleccionadas a nivel del orbe por el tamaño de sus ventas en 1994, sólo después de Dupont, Dow Chemical, Exxon, Shell, Monsanto, Amoco, Mobil y Chevron y tiene un nivel comparable con Texaco y Repsol.

No obstante lo anterior (o precisamente debido a que a pesar de la “quinta columna que tiene incrustada,” Pemex es un éxito y consecuentemente, desde la perspectiva del empresario petrolero estadounidense es un “mal ejemplo” para otros países del Tercer Mundo y de América Latina), todo indica que la decisión de subastar los complejos petroquímicos, que se viene preparando como parte de los programas “por rama” del Banco Mundial desde el sexenio delamadrista, se ha centrado en la estrategia de llevar a cada sector de Pemex a lo que los documentos del Banco Mundial (BM) califican como “un punto de venta” por medio del sabotaje interno expresado en fuertes “restricciones” a los presupuestos destinados a la modernización y ampliación de la planta productiva.

En el caso de los complejos petroquímicos que al margen de la normatividad vigente ya “comprometió” Zedillo ante las autoridades estadounidenses se ha dado a conocer que el proceso de desincorporación se acelerará ya que para 1996 el diseño presupuestal del Gobierno Federal pactado con el BM elimina todas las partidas destinadas a los complejos petroquímicos, restringiéndolas de manera abrupta, salvaje y desleal a un nivel de 267.8 millones de pesos en total (el año pasado la cifra osciló entre los 700 y 900 millones), apto sólo para el mantenimiento y rehabilitación de algunas plantas y ductos. Las consecuencias sociales, económicas, e incluso “político-mi-

⁶ Tanzer, Michael. “Estado de la industria mundial petrolera”, en *Seminario de Teoría del Desarrollo*, mimeo., enero de 1994, pp. 59-60.

litares” de este curso de acción son sumamente delicadas y potencialmente devastadoras para la federación, máxime si se tiene en cuenta que sólo en lo que respecta a la petroquímica, nos estamos refiriendo a una vasta estructura compuesta por 60 plantas distribuidoras localizadas en 10 centros petroquímicos, 14 centros de almacenamiento, una terminal marítima y un centro embarcador en Pajaritos, Veracruz, región donde la capacidad de producción representa el 88% del total nacional. Con operaciones concentradas en la cadena de etano, complementada con las de gas natural y productos derivados del crudo, Pemex posee una capacidad instalada de almacenaje equivalente a 355 030 toneladas; 1 179 000 kilómetros de ductos que cubren literalmente a todo el país, un ferrocarril petroquímico, dos buquestanques para transporte de amoníaco, con una capacidad de 10 500 toneladas y 300 autotanques disponibles para transporte de insumos. Las ventas totales de Pemex Petroquímica sumaron 7 055 millones de pesos en 1994 y 11 627 en 1995. El efecto multiplicador de orden económico, comercial, industrial, social y político de este inmenso complejo es inconmensurable y constituye uno de los principales elementos que conforman el “cemento” de las relaciones y las alianzas entre los estados productores y procesadores de petróleo y gas natural, como Veracruz, Chiapas, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua y la federación. Al colocar vastos complejos económico-territoriales en subasta el gobierno de Zedillo asume enormes riesgos sociales y políticos con potenciales y profundos efectos sobre el mantenimiento del mismo orden federal. El neoliberalismo ha acicateado todos los precipitantes de guerra interna. En el contexto desestabilizador del programa de “ajuste estructural” en vigor pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de Estados Unidos, mismo que en realidad es una unilateral declaración de guerra económica contra virtualmente todos los sectores de la población (exceptuando, desde luego a la mimada plutocracia mexicana) el programa de privatización de la petroquímica, del gas natural y del resto de codiciadas presas antes enumeradas, actuaría como un catalítico de conflicto socio-político de impredecibles consecuencias incluso al nivel de las relaciones “cívico-militares”, ya que el fundamento mismo, “la Razón de Estado” (que tiene en la sobrevivencia de la Carta Magna y de

la federación su fundamento) estaría en entredicho. David Shields percibió y sintetizó la muy delicada naturaleza de algunos aspectos del fenómeno en estos términos:

...existe todo tipo de indicios de que el sur de Veracruz, como ocurrió anteriormente con el Sur de Chiapas es una olla bajo enorme presión por el descontento social que sólo espera la menor provocación para estallar. Zedillo y su gobierno no tienen derecho de traicionar los valores públicos y profundizar las hendeduras del conflicto social y de los desacuerdos en ninguna parte de la nación, especialmente cuando su finalidad es realizar una subasta de complejos industriales que no tienen derecho alguno de vender... Existe profunda preocupación sobre la política petrolera y petroquímica de México, especialmente de parte de aquellos cercanos a esta gran industria. La lealtad histórica de la población del sureste, a la industria y a la empresa petrolera estatal, Pemex, está siendo intencionalmente manoseada. La población está molesta y un gobierno irresponsable se rehusa a oírla.⁷

7 Shields, David. *Op. cit.*